Naciones Unidas S/2021/174



Consejo de Seguridad

Distr. general
1 de marzo de 2021
Español
Original: inglés

Carta de fecha 24 de febrero de 2021 dirigida al Secretario General y a los Representantes Permanentes de los miembros del Consejo de Seguridad por la Presidencia del Consejo de Seguridad

Tengo el honor de adjuntar a la presente copia de las exposiciones informativas ofrecidas por la Representante Especial del Secretario General para Haití y Jefa de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, Sra. Helen Meagher La Lime; y la Directora de Plurielles Haiti, Sra. Vivianne Roc, así como de las declaraciones de los representantes de China, Estonia, Francia, la India, Irlanda, México, Noruega, la Federación de Rusia, San Vicente y las Granadinas —en nombre de los tres miembros africanos del Consejo de Seguridad, a saber, Kenya, el Níger y Túnez, así como de San Vicente y las Granadinas—, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los Estados Unidos de América y Viet Nam, en relación con la videoconferencia sobre “La cuestión relativa a Haití” celebrada el lunes 22 de febrero de 2021. El Presidente de Haití, Excmo. Sr. Jovenel Moïse, también formuló una declaración.

De conformidad con el procedimiento establecido en la carta de fecha 7 de mayo de 2020 dirigida a los Representantes Permanentes de los miembros del Consejo de Seguridad por la Presidencia del Consejo de Seguridad (S/2020/372), acordado a la luz de las circunstancias extraordinarias relacionadas con la pandemia de enfermedad por coronavirus, las exposiciones informativas y las declaraciones adjuntas se publicarán como documento del Consejo de Seguridad.

(*Firmado*) Barbara **Woodward**
Presidenta del Consejo de Seguridad

21-02812 (S) 010321 290321



Anexo I

Exposición informativa de la Representante Especial del Secretario General para Haití y Jefa de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, Helen Meagher La Lime

Es un honor tener una vez más la oportunidad de dirigirme a ustedes para proporcionarles información actualizada sobre la situación en Haití. A pesar de la precaria calma que reina actualmente en el país, los esfuerzos de una parte de la oposición por derrocar al Presidente Moïse antes del 7 de febrero, así como las medidas adoptadas por el ejecutivo para reaccionar a un supuesto intento de golpe de Estado y al anuncio de un alto magistrado de su nombramiento como Jefe de Estado interino de Haití, han endurecido aún más las posiciones de los principales protagonistas de la crisis política que afecta desde hace demasiado tiempo las vidas de la población haitiana. Mientras el país se prepara para entrar en un tenso período preelectoral, la polarización que ha definido la mayor parte del mandato del Presidente Moïse se ha agudizado aún más, ya que abundan los indicios de una reducción del espacio cívico, y la situación humanitaria, ya alarmante, sigue deteriorándose.

La crisis institucional en la que está sumida el país desde que el Parlamento dejó de funcionar en enero de 2020, tras la expiración de los mandatos de todos los parlamentarios de la Cámara Baja y de la mayoría de los senadores, sin que se hayan celebrado elecciones legislativas, corre el riesgo de profundizarse, ya que las relaciones entre los poderes ejecutivo y judicial parecen cada vez más tensas, y el Presidente Moïse sigue gobernando por decreto.

Aunque en los últimos meses la oposición no había logrado movilizar mucho apoyo popular en su campaña para destituir al Presidente, la reciente promulgación de decretos por parte de éste para jubilar efectivamente a tres jueces del Tribunal de Casación y nombrar a sus sustitutos llevó a varias asociaciones de magistrados a iniciar una huelga indefinida que amenaza con paralizar aún más un sistema judicial ya disfuncional. Además, el 14 de febrero, unos 3.000 manifestantes marcharon pacíficamente por las calles de Puerto Príncipe para denunciar lo que consideran un riesgo inminente de retorno al régimen autoritario.

Ya he mencionado la creciente preocupación por la reducción del espacio cívico en el país. La definición excesivamente amplia de terrorismo articulada en un decreto de 26 de noviembre sobre orden público —que incluye delitos menores como el vandalismo y la obstrucción de carreteras—, junto con el aumento de las amenazas y los ataques contra periodistas, abogados, jueces y defensores de los derechos humanos, corren el riesgo de enfriar el debate público y restringir derechos inalienables como la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la reunión pacífica.

Además, la situación humanitaria en el país es cada vez más grave. Las últimas estimaciones indican que alrededor de 4,4 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria en 2021, en su gran mayoría como consecuencia del aumento de la inseguridad alimentaria aguda. Aunque factores como la pandemia de enfermedad por coronavirus, su impacto económico, la violencia de las bandas y el paso de la tormenta tropical Laura contribuyeron a exacerbar las necesidades humanitarias en 2020, los factores subyacentes están estrechamente relacionados con las persistentes tensiones sociopolíticas y los déficits crónicos de desarrollo.

En este contexto complejo y potencialmente inestable, se sigue avanzando en la preparación de los distintos actos electorales previstos para este año. El Consejo Electoral Provisional ya ha instalado sus oficinas en las diez regiones de Haití, lo que ha permitido iniciar las actividades de logística y la planificación operacional. Además, el Gobierno haitiano ha aportado 20 millones de dólares al fondo colectivo

electoral gestionado por las Naciones Unidas para financiar tanto la compra de material electoral como la formación del personal electoral, así como para cubrir los costes operacionales y logísticos de la celebración de un referendo sobre una nueva constitución, cuyo proyecto de texto se hizo público el 1 de febrero.

Sin embargo, queda mucho por hacer. El ritmo y el alcance de las consultas sobre el proyecto constitucional deben mejorarse en gran medida. De hecho, si bien existe un consenso general entre las partes interesadas de Haití y la población en general sobre la necesidad de cambiar la constitución actual del país —considerada por muchos como una de las causas fundamentales de la inestabilidad crónica de Haití, sumido en un clima de polarización— algunos siguen considerando que el proceso elegido por el Gobierno para promulgar dicho cambio carece de legitimidad. Se debe brindar a todos los sectores de la sociedad haitiana, incluidos los partidos políticos, el sector privado, la sociedad civil, las iglesias, los grupos de mujeres y la diáspora, amplias oportunidades para debatir y contribuir al proyecto de texto. Además, para que las voces haitianas sean escuchadas, es necesario realizar esfuerzos adicionales para garantizar que un mayor número de ciudadanos haitianos se registren y obtengan el nuevo documento nacional de identidad que les permitirá votar. El Gobierno debe proporcionar a la Oficina de Identificación Nacional el apoyo que necesita para ampliar sin demora su campaña de registro. Por último, a pesar de la contribución inicial del Gobierno, el proceso electoral en su conjunto sigue teniendo graves carencias de financiación. Esta situación requiere la atención urgente de los asociados internacionales de Haití para evitar que se retrasen los comicios legislativos, presidenciales y locales.

Por encima de todo, un consenso mínimo entre los agentes políticos pertinentes contribuiría en gran medida a crear un entorno propicio para la celebración del referendo constitucional y las posteriores elecciones. La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití está dispuesta, en virtud de su mandato, a apoyar todas las iniciativas sinceras para favorecer ese resultado. El pueblo haitiano merece la oportunidad de expresarse en las urnas en un entorno pacífico y de decidir activamente el rumbo que tomará su país, libre del temor a la intimidación y la violencia política.

En este sentido, puede contar con una policía cada vez más profesional, cuyos cerca de 15.000 efectivos de ambos sexos desplegados por todo el país trabajan para mejorar la seguridad pública. No cabe duda de que afrontar los retos de seguridad asociados a la celebración del referendo y de las elecciones será una prueba decisiva para la Policía Nacional de Haití, y la amenaza que supone la asociación de algunos de sus agentes descontentos con grupos delictivos, como el “Fantom 509”, sigue mermando su rendimiento. Sin embargo, con el asesoramiento estratégico de las Naciones Unidas y el apoyo adecuado tanto de las autoridades nacionales como de los asociados internacionales, confío en que esta institución, que es de esencial importancia para el estado de derecho y la estabilidad en Haití, seguirá desarrollando su capacidad, de conformidad con las normas internacionales en materia de derechos humanos y de policía.

Por otra parte, me preocupa profundamente el reciente resurgimiento de los secuestros, así como la persistente impunidad y falta de rendición de cuentas por los delitos graves en Haití. Para hacer frente a estas lacras, que contribuyen en gran medida a la inestabilidad del país, las autoridades deben demostrar su compromiso y capacidad para detener y procesar tanto a los delincuentes como a los autores de violaciones de los derechos humanos, y para adoptar medidas concretas para proteger a los ciudadanos.

A pesar de las cuantiosas sumas y los infatigables esfuerzos invertidos en el desarrollo de Haití durante los últimos 25 años, el progreso del país hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible parece haberse estancado y,

en algunos casos, incluso parece haber retrocedido. Es evidente que la eficacia y el impacto del desarrollo en Haití siguen siendo muy bajos. De cara al futuro, la mejora de la colaboración y la confianza entre el Gobierno y los asociados internacionales en relación con los problemas estructurales de Haití será esencial para mejorar la asignación de prioridades de las esferas de intervención y la elaboración de soluciones integradas eficaces para dar respuesta a los problemas de Haití.

Sin embargo, aunque la Comisión Económica para América Latina y el Caribe prevé que la economía de Haití se contraerá un 3 % en 2021 y que la peor crisis económica que ha afectado a la región en 100 años repercutirá negativamente en la recuperación del país tras la enfermedad por coronavirus, solo una renovación democrática, que sea el resultado de la celebración sin demora de elecciones creíbles, transparentes y participativas, puede ofrecer a Haití la oportunidad de superar su prolongada crisis política y permitir que su sociedad y sus dirigentes centren su atención en emprender las reformas económicas y de gobernanza necesarias para volver a poner al país en la senda del desarrollo sostenible.

Anexo II

Exposición informativa de la Directora de Plurielles Haiti, Sra. Vivianne Roc

[Original: francés]

La inseguridad es una palabra que me resulta muy familiar, ya que he debido afrontarla desde la infancia. Contaba seis años cuando tuve que presenciar la muerte de un hombre. Lo único que recuerdo son los disparos y al hombre tendido en el suelo, en un charco de su propia sangre. Ese día me sentí aterrorizada. No entendía lo que acababa de suceder, y nadie se molestó en explicármelo.

Esa fue mi primera escena de violencia pero, lamentablemente, no sería la última. Unos meses después de ese incidente, mi familia se mudó y, por desgracia, la situación no cambió; incluso empeoró. Más tarde, en 2006, tuvimos que abandonar nuestra casa a toda prisa por un conflicto entre bandas. Había que huir si no queríamos convertirnos en un daño colateral. Por aquel entonces era tan solo una niña, y no entendía por qué no podía volver a casa; solo sabía que tenía que aceptarlo y no hablar de ello, para evitar que me señalaran en la escuela como la niña que vivía en un gueto. Porque esa era mi vida, y me sentía terriblemente avergonzada de ella.

Día tras día, el bandidaje y la violencia de las bandas se fueron convirtiendo en una parte cada vez mayor de mi vida, hasta convertirse en algo casi normal. Los enfrentamientos entre bandas son frecuentes, mucho más que entre las bandas y las fuerzas del orden. La zona en la que vivo se ha convertido en lo que se denomina una zona sin ley. Todo el mundo sabía lo que allí ocurría, pero nadie se atrevía a hablar de ello, y mucho menos a intervenir.

No son pocos los muertos que he visto frente a mi casa. La sangre siempre acaba desapareciendo del asfalto, pero nunca de mi memoria. Han muerto muchas personas, a veces eran amigos, otras veces vecinos, o simplemente alguien que me sonaba de vista.

Pero a pesar de todo, nos quedamos, porque teníamos la esperanza de que la zona podía cambiar, de que, a pesar de toda esta violencia, se podía convertir en un buen lugar donde vivir. Hasta el año pasado, cuando todo empeoró y tuve que huir de mi casa una vez más. El año pasado tuve que vivir cosas que no le desearía a nadie.

La joven que tienen hoy ante ustedes está indignada por el aire de inseguridad que planea sobre su país. No forma parte de ningún movimiento político, no hace apariciones públicas y, desde luego, no busca notoriedad. Simplemente está cansada de vivir con miedo. La niña que lleva dentro simplemente está harta de vivir con el miedo de que le alcance una bala, de ser víctima de un ataque o de un secuestro. Hoy ya no me avergüenzo de mi origen. Quiero convertirme en la voz de los jóvenes del gueto. Asumo mi realidad y quiero luchar y mostrar el camino a otros jóvenes que la comparten. Me llamo Vivianne Roc, tengo 23 años y vivo en Haití.

Quiero presentarles Plurielles, una organización ecofeminista de jóvenes que se ha adherido recientemente a la Red Internacional de Jóvenes Constructores de Paz para contribuir a mejorar el clima de paz y seguridad en Haití. Como organización, Plurielles se dedica a ayudar a las mujeres a encontrar su independencia, y a promover la equidad de género, la igualdad de los jóvenes, y la paz y el voluntariado en Haití.

Plurielles considera que la juventud es un recurso importante y esencial para el desarrollo, por lo que trabaja en la elaboración de estrategias para movilizar a la juventud y facilitar su participación en el proceso de desarrollo. Creada en 2010 tras el devastador terremoto, la organización centra sus recursos en contribuir al fomento de la independencia de los jóvenes y de sus comunidades con miras a desarrollar

programas y actividades orientadas a resolver los problemas socioeconómicos y medioambientales. Nuestros programas incluyen la realización de grandes campañas de concienciación y de actividades de desarrollo de las aptitudes de los jóvenes en materia de gestión de conflictos, y la formación de líderes comunitarios sobre cuestiones relacionadas con la violencia, los conflictos y las causas de la violencia.

Plurielles pretende aportar su contribución a esta sociedad y a los jóvenes que, como yo, han vivido cosas horribles, a los jóvenes que tienen cosas que decir, o que buscan respuestas y quieren salir de la oscuridad. Tengo un mensaje para los jóvenes de los barrios desfavorecidos: "Ya no estáis solos: Plurielles, con la ayuda de la Red Internacional de Jóvenes Constructores de Paz, está ahí para apoyaros". En Haití hay muchos jóvenes que, como yo, a pesar de lo vivido, a pesar de los obstáculos, los riesgos, la pobreza y la cultura de las bandas, se movilizan para defender los valores de la paz, la igualdad y la justicia social. Algunos lo hacen a través de organizaciones como el Consejo Consultivo de la Juventud, otro miembro de la Red Internacional de Jóvenes Constructores de Paz.

Debemos hacer frente a numerosas dificultades en nuestro trabajo y en la vida cotidiana en Haití. Por lo tanto, permítaseme proponer una serie de recomendaciones, que espero sean consideradas seriamente por el Gobierno haitiano y la comunidad internacional.

Deben crearse centros de rehabilitación para los presos jóvenes, con el fin de ayudarles a adquirir competencias para que puedan encontrar trabajo y alojamiento una vez que hayan cumplido sus condenas, y reintegrarse en la sociedad.

Se debe elaborar un programa social y educativo que permita a los jóvenes socializar y aprender sobre temas como la consolidación de la paz, los derechos humanos y la transformación de los conflictos.

Deben reforzarse los controles contra el tráfico de armas y sustancias ilícitas en Haití.

Deben crearse centros de apoyo a las víctimas de la persecución y la violencia de las bandas, que ofrezcan también apoyo psicoemocional a sus allegados.

También debe crearse un centro de atención telefónica para las mujeres que sufren violencia doméstica, para poder acudir en su ayuda con la mayor celeridad posible.

Se deben poner fondos a disposición de las mujeres que han sufrido violencia doméstica para alejarlas de sus agresores y ayudarlas a independizarse.

Hay que financiar a organizaciones como la mía que trabajan por una paz más sostenible.

Deben establecerse redes de protección para los jóvenes que se dedican a consolidar la paz en el ámbito local, de modo que puedan continuar su importante labor sin temor en el día a día. Sin ellos, realmente no tenemos nada.

Es gracias a mi trayectoria que he llegado a estar aquí ante ustedes para exponerles mi mensaje. Espero que mi declaración les conmueva y no me ponga en peligro. Aunque siento un poco de ese miedo que he descrito antes, también me siento esperanzada, como se puede escuchar en mi mensaje, esperanzada de que entre los poderosos se encuentren aquellos lo suficientemente valientes como para impulsar los cambios necesarios para lograr una paz duradera en Haití. Ha llegado el momento de hablar a favor de Haití. Ustedes pueden ayudarnos. Ustedes deben ayudarnos. *Nou Bouke*.

Anexo III

Declaración del Representante Permanente Adjunto de China ante las Naciones Unidas, Geng Shuang

[Original: chino]

China agradece a la Representante Especial del Secretario General Meagher La Lime su exposición informativa. He escuchado con atención las presentaciones de los representantes de la sociedad civil haitiana, como lo haré con la del Presidente de Haití.

En Haití, el bloqueo político continúa. Las condiciones de seguridad se están deteriorando. La pandemia de enfermedad por coronavirus se ha complicado por las dificultades económicas y sociales. El aumento de la delincuencia violenta está relacionado con el malestar social. Esto ha supuesto un enorme sufrimiento para la población. Haití sigue atrapado en múltiples crisis políticas, económicas, sociales y humanitarias. El pueblo haitiano parece haber perdido la esperanza en el futuro. El Gobierno y los dirigentes haitianos deben ser los principales responsables de esta desesperanza e incluso desesperación. Los partidos políticos haitianos llevan mucho tiempo enzarzados en interminables disputas. Los políticos no han hecho nada en absoluto. La corrupción y el abuso de poder persisten desafiando su prohibición, y la gobernanza nacional casi ha fracasado.

Este año es crucial para Haití. El Secretario General lo describe en su informe (S/2021/133) como un punto de inflexión para Haití. El referéndum constitucional que se celebrará en abril y las posteriores elecciones parlamentarias presidenciales y locales marcarán, en gran medida, la evolución de la situación política haitiana en el futuro y el destino del pueblo haitiano.

China apoya el llamamiento del Secretario General e insta encarecidamente a todos los partidos políticos de Haití a anteponer los intereses del país y del pueblo, abandonar los intereses propios, asumir sus responsabilidades, escuchar atentamente las opiniones de personas de todas las clases sociales y promover el referéndum constitucional y las elecciones sobre la base de un amplio consenso político y mediante el diálogo y las consultas, a fin de crear las condiciones para restablecer la estabilidad política del país y conseguir la seguridad y el desarrollo. No deben volver a defraudar a los haitianos ni a la comunidad internacional, ni rechazar la ayuda de esta.

China aprecia la dedicación y las contribuciones de las Naciones Unidas para ayudar al pueblo haitiano y apoya a la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) en sus continuos esfuerzos de mediación para promover el diálogo político y la celebración de elecciones en Haití. Al mismo tiempo, la experiencia nos dice que, a menos que todos los partidos políticos haitianos asuman sus responsabilidades, demuestren voluntad política y trabajen juntos a favor de la estabilidad y el desarrollo nacional, cualquier iniciativa y ayuda externa no servirán de nada.

Las Naciones Unidas llevan desde la década de los 90 dedicando enormes recursos a ayudar a Haití a salir de la crisis. En los últimos 30 años, el Consejo de Seguridad ha desplegado la Misión de las Naciones Unidas en Haití, la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití, y ahora, la BINUH. El coste total de esas operaciones ha alcanzado casi 8.000 millones de dólares. Además, diversos organismos del sistema de las Naciones Unidas y donantes y asociados internacionales han puesto en todo momento un enorme empeño en ayudar a Haití a recuperar la estabilidad, lograr el desarrollo y proteger los derechos humanos. El monto de la inversión acumulada es asombroso. Nos duele ver que todas esas inversiones parecen no haberse valorado ni utilizado con sensatez, y tampoco han dado los resultados deseados.

Me gustaría volver a insistir en que el problema de Haití no se puede resolver externamente. Deberíamos aprender la lección, evaluar exhaustivamente la situación en vista de lo que está ocurriendo, reflexionar seriamente sobre la futura presencia de las Naciones Unidas en Haití y evitar inversiones interminables e infructuosas.

Anexo IV

Declaración de la Misión Permanente de Estonia ante las Naciones Unidas

Quisiera dar las gracias a la Representante Especial del Secretario General, Sra. Helen Meagher La Lime, y a la Sra. Vivianne Roc por sus intervenciones de hoy y por su valiosa labor. Asimismo, saludo la presencia del Presidente Jovenel Moïse.

A Estonia le preocupa la falta de estabilidad política en Haití. En este momento tan crucial, se necesita un mayor esfuerzo y responsabilidad por parte de todos los partidos para demostrar su voluntad política. Hacemos un llamamiento a todos los agentes políticos para que resuelvan sus diferencias mediante el diálogo pacífico.

El proceso de elecciones y el anuncio del calendario electoral ofrecen una oportunidad que debe aprovecharse sabiamente para superar la larga crisis política y restablecer la democracia y la estabilidad en Haití. Es crucial que el referéndum de abril sobre las enmiendas constitucionales, así como las elecciones legislativas y presidenciales de este año, se desarrollen de forma pacífica. Para garantizar el éxito de las elecciones, se necesita una buena preparación técnica. Es especialmente importante procurar que el proceso de registro de ciudadanos se lleve a cabo sin problemas.

Al mismo tiempo, es fundamental mejorar la situación de la seguridad. Los últimos informes sobre el aumento del nivel de violencia, asesinatos, secuestros y delincuencia relacionada con las bandas son sumamente preocupantes. Acogemos con satisfacción el nombramiento del nuevo Director General interino de la Policía Nacional de Haití. Instamos a que se redoblen los esfuerzos para poner fin a las actividades delictivas relacionadas con las bandas. Es importante proteger un espacio cívico ya reducido, velando por que las personas que participan en el debate público puedan hacerlo sin poner en peligro su vida y su seguridad.

Reconocemos la labor de la Inspección General de la Policía Nacional de Haití dirigida a investigar las acusaciones. Sin embargo, aunque algunos agentes de la autoridad han recibido sanciones administrativas como consecuencia de su mala conducta, el poder judicial aún no ha exigido responsabilidades a los agentes de la Policía Nacional de Haití, a pesar de las varias investigaciones penales que se han abierto en los últimos años. Seguimos preocupados por la falta de avances en las investigaciones judiciales de los emblemáticos casos Grand-Ravine, La Saline, Bel Air y otros. Las huelgas del personal judicial y de los fiscales afectaron gravemente al derecho de acceso a la justicia. Las condiciones de detención siguen siendo nefastas, a pesar de los esfuerzos constantes de las partes interesadas por mejorarlas.

Subrayamos la importancia de mejorar la rendición de cuentas y pedimos al Gobierno de Haití que mejore el sistema judicial y garantice que todos los casos se investiguen adecuadamente y que los autores comparezcan ante la justicia.

Instamos al Gobierno a aprobar el plan de acción nacional sobre derechos humanos, pendiente desde 2019.

Por último, quisiera dar las gracias a la Representante Especial Meagher La Lime y a su equipo por su labor incansable. Seguimos albergando la esperanza de que los esfuerzos constantes de todas las partes forjen un futuro mejor para Haití. El pueblo haitiano merece tener un Estado estable con democracia, estado de derecho y desarrollo sostenible.

Anexo V

Declaración de la Representante Permanente Adjunta de Francia ante las Naciones Unidas, Nathalie Broadhurst

[Original: inglés y francés]

Quisiera, en primer lugar, dar las gracias a la Representante Especial del Secretario General, Sra. Meagher La Lime, por su presentación tan esclarecedora, así como a la Sra. Roc por su conmovedor testimonio, y saludar la presencia entre nosotros del Presidente Jovenel Moïse.

Francia observa con suma preocupación el deterioro de la situación en Haití. Como hemos dicho en numerosas ocasiones, la solución a la crisis actual es política. Y como sabemos, al no haber elecciones, el Parlamento no se ha reunido durante todo un año. Las autoridades haitianas gobiernan por decreto y algunos de esos decretos son preocupantes, sobre todo aquellos por los que se creó la Agencia Nacional de Inteligencia, se amplió la acusación de terrorismo y se destituyó a tres jueces que, según la Constitución, no pueden ser destituidos. No tengo ninguna reserva a la hora de afirmar que esta situación no es sostenible a largo plazo.

Las elecciones están previstas para este otoño, lo que supone un paso en la buena dirección. Sin embargo, dichas elecciones deben contribuir a salir de la crisis y no aumentar la confusión actual. En nuestra opinión, deben cumplirse tres condiciones para que Haití vuelva a la senda de la estabilidad. En primer lugar, tienen que existir unas condiciones mínimas de seguridad para que las elecciones se celebren en condiciones satisfactorias. En segundo lugar, las autoridades deben acelerar la distribución de tarjetas de identificación para que la participación en los comicios sea lo más amplia posible. En tercer lugar, debe haber un juez electoral imparcial para que los resultados sean aceptados por todos.

También se ha anunciado una revisión constitucional. No nos corresponde a nosotros hablar de ese proceso. Solo esperamos que las partes interesadas del país tengan la oportunidad de debatir el texto y sus implicaciones institucionales a largo plazo y, sobre todo, velen por que no provoque nuevos retrasos en las distintas elecciones.

En cuanto a la seguridad y el respeto de los derechos humanos, las autoridades deben hacer más al respecto. Permítaseme hacer esta pregunta directa: ¿Cómo es posible que Jimmy Cherizier siga estando en libertad hoy en día? Los responsables de las masacres de La Saline y Bel Air deben comparecer ante la justicia. También observo que la investigación sobre el asesinato de Monferrier Dorval no avanza. La lucha contra la impunidad debe ser la prioridad de las autoridades.

Ante el recrudecimiento de la violencia y, en particular, el aumento del número de bandas, el Estado haitiano debe redoblar sus esfuerzos. Hay que aumentar y consolidar aún más los recursos de la Policía Nacional de Haití, cuya conducta debe ser irreprochable a la hora de garantizar el respeto del estado de derecho.

Debemos mirar la situación con la vista clara. En la actualidad, la credibilidad de las instituciones del Estado haitianas está muy erosionada, sobre todo por los casos de corrupción que están minando la confianza de la población. Hay casi cuatro millones de haitianos que viven en la pobreza extrema y sufren inseguridad alimentaria, como han señalado varios de mis colegas. Esta situación no puede más que aumentar las fracturas y tensiones sociales.

La labor de la Representante Especial del Secretario General y del equipo de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití es indispensable, y les rendimos homenaje. Su labor para facilitar el diálogo político y la gobernanza es esencial.

Para concluir, deseo reafirmar que Francia, a título nacional, pero también a través de la acción de la Unión Europea y de la Organización Internacional de la Francofonía, está — más que nunca— al lado de Haití y de los haitianos.

Anexo VI

Declaración del Representante Permanente Adjunto de la India ante las Naciones Unidas, Ravindra Raguttahalli

Para empezar, permítaseme celebrar la presencia del Presidente de Haití, Excmo. Sr. Jovenel Moïse, en esta sesión. Me gustaría unirme a los demás para agradecer a la Representante Especial del Secretario General, Sra. Helen Meagher La Lime, su informe sobre las novedades en Haití. También agradezco a la Sra. Vivianne Roc que haya aportado la perspectiva de la sociedad civil a la reunión de hoy.

Las sesiones informativas de hoy nos brindan la oportunidad de evaluar la situación en Haití y las actividades de la misión de las Naciones Unidas en el cumplimiento de su mandato en virtud del Capítulo VI, en particular con respecto a los seis índices de referencia relativos al marco estratégico integrado.

Mi delegación toma nota positivamente de todo lo que Haití ha logrado en la última década, tras el devastador terremoto de 2010. La recuperación de Haití tras el terremoto y la epidemia de cólera, la celebración de elecciones en 2010 y 2015, el traspaso pacífico del poder y el aumento de las capacidades policiales reflejan la resiliencia del pueblo haitiano. También reconocemos el importante papel que desempeñan la comunidad internacional y los asociados bilaterales a la hora de ayudar a Haití en su recuperación.

Sin embargo, el pueblo haitiano sigue sufriendo los efectos de una crisis multifacética que, por desgracia, se prolonga desde hace décadas. Hoy más que nunca necesitan el apoyo inquebrantable de la comunidad internacional. Como se refleja en el último informe del Secretario General (S/2021/133) y como se desprende de los recientes acontecimientos políticos, Haití tiene graves problemas políticos y de seguridad. Además, la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) también ha afectado adversamente las situaciones económica y humanitaria. Los últimos acontecimientos reflejan la fragilidad de la situación política y la falta de confianza entre los agentes políticos. Además, el hecho de que no exista una interpretación objetiva consensuada del derecho constitucional haitiano no ha hecho más que acentuar las diferencias políticas, lo que repercute negativamente en la estabilidad institucional, la buena gobernanza y el estado de derecho.

Este año será crucial para Haití en cuanto a sus esfuerzos por consolidar los logros democráticos alcanzados en la última década. La estabilidad política es fundamental para que la gobernanza sea eficaz y estimule el desarrollo socioeconómico general. Para lograr la estabilidad política a largo plazo, es crucial que todas las partes interesadas participen en el diálogo nacional y trabajen para celebrar unas elecciones legislativas y presidenciales pacíficas y creíbles.

En ese sentido, permítaseme formular las observaciones siguientes.

En primer lugar, hemos tomado nota del nombramiento del Comité Constitucional Consultivo Independiente. Esperamos que se lleve a cabo un proceso consultivo, en el que participen todas las partes interesadas, para alcanzar decisiones que reflejen adecuadamente las esperanzas y aspiraciones del pueblo de Haití.

En segundo lugar, el proyecto de desarme, desmovilización y reintegración que se está llevando a cabo en el marco del Fondo para la Consolidación de la Paz del Secretario General está ayudando a abordar la cuestión de la violencia de las bandas armadas. Esperamos la pronta aplicación de la estrategia nacional de reducción de la violencia comunitaria por parte de las autoridades haitianas. También acogemos con satisfacción las medidas para reforzar la Policía Nacional de Haití con el fin de capacitarla para hacer frente a la violencia de las bandas y mejorar su estrategia comunitaria.

En tercer lugar, es fundamental avanzar en las reformas de la justicia para recuperar la confianza de la población. A este respecto, señalamos el papel desempeñado por la Inspección General de la Policía Nacional de Haití con respecto a la reforma policial. También serían bienvenidas iniciativas proactivas similares en otros ámbitos de la seguridad pública y la justicia penal.

En cuarto lugar, en lo que respecta al indicador 5 —desempleo, jóvenes y otros grupos vulnerables— y al indicador 6 —prestación de servicios sociales básicos y resiliencia—, tomamos nota de las actividades de la misión para apoyar la labor del Gobierno y la animamos a que continúe sus actividades, de acuerdo con su mandato.

La India está dispuesta a colaborar con la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití y con el equipo de las Naciones Unidas en el país para llevar a cabo su mandato, especialmente en áreas prioritarias como la administración de justicia, la convocatoria de elecciones y la reducción de la violencia, mediante actividades de desarrollo de capacidades y de creación de instituciones, con plena implicación nacional. Nos sumamos al llamamiento a todas las partes interesadas para entablar un diálogo nacional con el fin de lograr la estabilidad política, introducir reformas constitucionales y celebrar elecciones de forma pacífica para promover las instituciones democráticas en el país con el apoyo de la comunidad internacional.

La India mantiene una relación de larga data con Haití y su pueblo. La India ha sido uno de los principales países que aportan contingentes a las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en Haití y aportó tres unidades de policía constituidas a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití en 2008 y a la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití en 2017. La última tanda del contingente indio de los Rifles de Assam partió de Haití en agosto de 2019 y recibió una medalla de las Naciones Unidas en reconocimiento de su valiosa labor en el país.

La India contribuyó a los esfuerzos de las autoridades haitianas para hacer frente al devastador terremoto de 2010. Inmediatamente después del terremoto, la India aportó 5 millones de dólares para las medidas de socorro del Gobierno de Haití, entre ellas la construcción de una colonia de viviendas conocida como Mahatma Gandhi Village, como muestra de su solidaridad con la población de Haití. La India también prestó asistencia financiera de emergencia a Haití tras el paso del huracán Matthew en octubre de 2016.

En julio de 2020, se aprobó un proyecto de 1 millón de dólares con cargo al fondo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la India destinado a la instalación de bombas solares en Haití. La India también ha venido asistiendo a Haití en su lucha contra la pandemia de COVID-19, ya que ha aportado hidroxicloroquina, medicamentos esenciales y equipos de protección en julio, y ahora está en proceso de enviar 10.000 dosis de vacunas contra la COVID-19. Esperamos con interés seguir apoyando al pueblo de Haití en sus esfuerzos por salir más resiliente de la difícil situación actual.

Anexo VII

Declaración de la Representante Permanente de Irlanda ante las Naciones Unidas, Geraldine Byrne Nason

[Original: francés e inglés]

Quisiera sumarme a otros oradores para dar las gracias a la Representante Especial del Secretario General, Sra. Meagher La Lime, por su exposición informativa. Quisiera también agradecer la presencia del Presidente de la República de Haití, Excmo. Sr. Moïse. Asimismo, quisiera dar la bienvenida a la Sra. Roc esta tarde al Consejo.

Es innegable que la sesión de hoy tiene un sentido de urgencia. La situación en Haití, descrita en el informe más reciente del Secretario General (S/2021/133), merece —y diría más: exige— la atención del Consejo. Durante demasiado tiempo, la población de Haití ha sufrido una serie de crisis entrelazadas e interconectadas. Son crisis políticas, constitucionales, de seguridad, económicas y, naturalmente, humanitarias.

Dadas las limitaciones de tiempo, me centraré en tres observaciones.

En primer lugar, es absolutamente necesario que se celebre un diálogo genuino e inclusivo. Hoy sabemos que la situación en Haití sigue siendo extremadamente tensa. Para cualquiera de nosotros, la confianza en el estado de derecho, en un sistema de gobernanza, es la base de una democracia auténtica. La anulación de las elecciones legislativas, la disolución del Parlamento y el uso frecuente y amplio de decretos presidenciales aumentan el riesgo de agudizar la desconfianza en el sistema político y acentuar las divergencias entre los agentes políticos.

El año próximo brinda a Haití la oportunidad de restaurar y revitalizar su democracia. Es esencial que el proceso de registro de ciudadanos se lleve a cabo de forma transparente y eficaz, garantizando que todos los haitianos con derecho a voto tengan la oportunidad de ejercerlo. Es especialmente importante que se escuchen las voces de las mujeres y los jóvenes.

Para decirlo más claramente: creemos que el ambicioso calendario electoral del Gobierno solo puede tener éxito si se fomentan la confianza y la colaboración de todo el espectro político. Hacemos un llamamiento urgente a todas las partes para que entablen un diálogo inclusivo. El proceso de reforma constitucional debe gestionarse con sensibilidad y cuidado, entre otras vías mediante una consulta pública adecuada. Esa consulta también debe tener en cuenta las opiniones de las mujeres y los jóvenes.

Reconocemos que la protección del espacio de la sociedad civil, incluido el derecho a la protesta pacífica, es fundamental para una democracia próspera. Lamentamos la reciente detención de líderes políticos y comunitarios y exigimos que se proteja a los periodistas y a los manifestantes pacíficos. Nos preocupa especialmente la reciente redefinición de terrorismo para incluir los actos de protesta legítima.

En segundo lugar, como resultado del deterioro de la situación de la seguridad, los ciudadanos más vulnerables de Haití son los que más sufren. La magnitud de los homicidios, las violaciones, los secuestros y los raptos que se denuncian es, francamente, aterradora. Los responsables de tales crímenes deben rendir cuentas. La repercusión de la violencia y la posterior impunidad sobre las mujeres, los jóvenes y los niños es muy preocupante. El aumento del 95,9 % de las violaciones de los derechos humanos registradas por la propia Misión de las Naciones Unidas es especialmente descarnado. Ninguna comunidad debería vivir —ni se debería esperar que viva— con ese grado de violencia y miedo. Instamos al Gobierno a que dé prioridad a la aprobación del plan de acción nacional sobre los derechos humanos y al respaldo de la estrategia nacional de reducción de la violencia comunitaria.

Irlanda celebra los avances en cuanto a la reforma de la policía de los que se ha informado, pero sigue preocupada por los desafíos que enfrentan los sistemas judicial y penal. El fin de la impunidad y el acceso sin trabas a la justicia son un requisito indispensable para que haya alguna posibilidad de fomentar la confianza entre la población de Haití. La destitución de tres magistrados de la Corte Suprema este mes es preocupante, y nos oponemos enérgicamente a los intentos de socavar el papel y la independencia del poder judicial.

En un tono más positivo, quiero reconocer y agradecer la importante función del Fondo para la Consolidación de la Paz en Haití. Los inestimables proyectos que apoyan el acceso de las mujeres y los jóvenes a los servicios de asistencia jurídica y judicial facilitan su participación en las iniciativas de consolidación de la paz. Así es como realmente se consigue una paz duradera y sostenible, no con todas nuestras declaraciones altisonantes aquí, sino desde la base hacia arriba y con la participación plena, equitativa y significativa de las mujeres y la implicación activa de los jóvenes. La población de Haití se merece nada menos que una vida pacífica, libre de violencia e intimidación.

Mi tercera observación se refiere a las dificultades para la prestación de servicios básicos y a las necesidades humanitarias crónicas de más de 4,4 millones de haitianos, como se indica en el informe del Secretario General. Encomiamos la labor del Programa Mundial de Alimentos encaminada a evitar que los haitianos mueran de inanición.

La verdadera tragedia, de hecho, es que sabemos que ese sufrimiento no es inevitable. Las organizaciones no gubernamentales internacionales, como la organización irlandesa GOAL, informan de que las necesidades humanitarias derivan de la violencia, la inseguridad, la vulnerabilidad climática y la inestabilidad de la que hemos hablado hoy aquí. Una vez más, los más vulnerables de la sociedad se ven obligados a asumir la carga más pesada.

La educación, especialmente la de las niñas, es el catalizador para conseguir la consolidación de la paz, la seguridad y el fomento de la igualdad de género. No se puede permitir que aproximadamente uno de cada tres niños y niñas que siguen sin ir a la escuela después del año escolar perdido se queden atrás. En sus conmovedoras observaciones de hoy, la Sra. Roc ha demostrado claramente la dinámica que impera en la juventud de Haití. La comunidad internacional simplemente debe reaccionar y responder a su repercusión y comprometerse a tomar medidas.

Para concluir, estamos de acuerdo con la Representante Especial en que 2021 podría ser un punto de inflexión en Haití. Es crucial que la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití preste todo su apoyo para solucionar la crisis constitucional y política y cumpla plenamente su mandato. Una vez más, quisiera reafirmar nuestro decidido apoyo a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, al sistema de organismos de las Naciones Unidas y a todos los agentes que trabajan con la población de Haití para construir un nuevo futuro basado en una transición pacífica del poder, un sistema político y económico estable y, esperamos, una sociedad libre de intimidación y violencia.

Anexo VIII

Declaración del Representante Permanente de México ante las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente Ramírez

[Original: español]

Doy la bienvenida al Consejo al Presidente, Excmo. Sr. Moïse, y agradezco las presentaciones de la Representante Especial Helen Meagher La Lime y de Vivianne Roc. Escuchar las voces de la sociedad civil resulta de la mayor importancia para los trabajos de este órgano.

Hoy abordamos la situación en un país hermano de México, al que nos unen profundos lazos de amistad: la primera nación de América Latina y el Caribe en obtener su independencia. Para mi país, la situación en Haití es un tema prioritario. Su prosperidad y estabilidad es un tema pendiente para las Américas.

Las recientes tensiones políticas y la violencia en Haití son motivo de gran preocupación, por lo que nuestros esfuerzos colectivos deben orientarse hacia una consolidación democrática, que conlleve la estabilidad política, económica y social.

El año 2021 es crucial en la transición democrática en Haití, por lo que exhortamos a que las autoridades y todos los actores nacionales, con el apoyo de la comunidad internacional, colaboren para garantizar la realización de procesos electorales pacíficos, transparentes, participativos e incluyentes. Tomamos nota de la propuesta de llevar a cabo un referéndum constitucional. Esperamos que se garanticen las condiciones necesarias para permitir una amplia participación de la sociedad haitiana en un ambiente pacífico. Instamos a las autoridades a no escatimar esfuerzos ni recursos para que esa consulta sea un verdadero ejercicio democrático, cuyo resultado refleje la voluntad popular de la sociedad haitiana.

Dada la trascendencia de los procesos electorales que deberán realizarse este año y para asegurar la gobernanza, la transición democrática y la estabilidad, en atención a la solicitud hecha a las Naciones Unidas para brindar apoyo a Haití, México puede ofrecer, si así se conviene, capacitación técnica a las autoridades electorales haitianas con miras a la celebración de sus próximas elecciones.

Valoramos y respaldamos las actividades que desarrolla la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) para el fortalecimiento institucional, la estabilidad y el desarrollo de ese país. El informe del Secretario General (S/2021/133) refleja la delicada tarea que vive el pueblo haitiano. Tomamos nota de las acciones a realizar para materializar reformas significativas a la gobernabilidad y así superar los obstáculos estructurales al desarrollo y a los procesos electorales. Damos la bienvenida al plan Una ONU, en el cual la cooperación y la estrecha coordinación con y al interior del equipo en el país resulta fundamental para fortalecer la capacidad institucional haitiana y promover el desarrollo sostenible.

Para México es muy importante que la BINUH tenga una comunicación fluida y apoye a las autoridades haitianas en los esfuerzos para establecer una estrategia que atienda a profundidad las causas que han derivado en expresiones sociales discordantes. Preocupa sobremanera la violencia que caracteriza a las pandillas. Esperamos que pronto se apruebe la estrategia nacional de reducción de la violencia comunitaria, e instamos a que se establezca un marco nacional integral de gestión de armamento y municiones, de conformidad con las directrices internacionales sobre el control de armas.

Celebramos la decisión del Gobierno de Haití de alinear su estrategia nacional de desarrollo con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y el apoyo que las agencias de Naciones Unidas otorgan a las prioridades que define el propio país. Frente

a los desafíos que conlleva la pandemia de enfermedad por coronavirus, México respalda el componente del desarrollo social, para una recuperación sostenible, como lo señala el mandato de la BINUH, y la necesidad de conciliar con éxito los pilares de desarrollo, derechos humanos y seguridad. La labor del Grupo Asesor Especial sobre Haití del Consejo Económico y Social, en el que México participa activamente, ha contribuido a identificar con claridad las graves necesidades de la nación haitiana.

Como parte de los proyectos de cooperación técnica y científica que promueve México en América Latina y el Caribe, continuaremos con los programas de becas para brindar apoyo a la movilidad estudiantil de Haití y robustecer nuestra colaboración en materia de protección civil frente a desastres nacionales.

Nos preocupa la situación de los derechos humanos reflejada en el informe del Secretario General, así como las conclusiones presentadas en el informe conjunto de la BINUH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en particular lo referente a la rendición de cuentas y el uso excesivo de la fuerza. Son inadmisibles los casos de amenazas y ataques a defensores de los derechos humanos y miembros de la sociedad civil, y subrayamos la necesidad de respetar plenamente la libertad de expresión.

La solidez e independencia del poder judicial constituye otro elemento clave para alcanzar la estabilidad en Haití. El camino hacia la consolidación democrática requiere de jueces y tribunales que se pronuncien libremente y cuyas sentencias consoliden el estado de derecho.

El Consejo no debe escatimar esfuerzos para garantizar el éxito del modelo de transición de una operación de mantenimiento de la paz a una misión política especial. Para ello, es fundamental el trabajo coordinado de las agencias, los fondos y los programas de las Naciones Unidas presentes en el terreno. En tal sentido, convendría considerar la apertura en Haití de una oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. También ayudará a promover y coordinar mejor los esfuerzos que se realizan entre el Consejo, la Comisión de Consolidación de la Paz y el Consejo Económico y Social.

Finalmente, quisiéramos subrayar que las decisiones sobre el futuro de Haití corresponden exclusivamente a los haitianos. Reiteramos nuestra disponibilidad para apoyar a superar la compleja trama en la que están inmersos, a través de un proceso democrático, en el que prevalezcan los intereses de la mayoría, con pleno respeto a los derechos humanos, que permita sentar las bases para un futuro de prosperidad, tal y como lo aspiraron los libertadores haitianos hace ya 230 años.

Anexo IX

Declaración de la Representante Permanente Adjunta de Noruega ante las Naciones Unidas, Trine Skarboevik Heimerback

Quisiera agradecer al Secretario General y a la Representante Especial Meagher La Lime el informe (S/2021/133) y las recomendaciones concretas contenidas en él, que apoyamos.

La turbulenta situación política de Haití, que está evolucionando mientras hablamos, es ciertamente preocupante y un duro recordatorio de la frágil y precaria situación del país. La inestabilidad actual de Haití se debe a un sistema político demasiado complejo. Se necesita urgentemente una reforma de la gobernanza gestionada por el propio país para superar los obstáculos estructurales a la estabilidad y el desarrollo. Un compromiso genuino con los principios democráticos debe ser un requisito previo.

Instamos a los agentes políticos a que se comprometan a dialogar en pos de un programa común. El calendario electoral propuesto para un referendo constitucional, así como para las elecciones legislativas, municipales, locales y presidenciales, es un plan ambicioso. Sin embargo, si se aplica de forma ordenada y pacífica, podría representar un primer paso para salir de la crisis actual.

Noruega se siente profundamente preocupada por la vulnerabilidad de Haití a las catástrofes naturales causadas por el cambio climático y la degradación del medio ambiente. Ello repercute en los medios de subsistencia y lleva a la pobreza y al desplazamiento interno, lo que, en consecuencia, alimenta la delincuencia, los disturbios y una mayor inestabilidad. Además, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Haití se encuentra actualmente entre los países con mayor inseguridad alimentaria del mundo. Un total de 4,4 millones de haitianos necesitan asistencia humanitaria. Se trata de una cifra enorme, que tiene consecuencias de gran alcance.

El bajo rendimiento de las cosechas debido a unas precipitaciones por debajo de lo normal contribuirá probablemente a aumentar la inseguridad alimentaria. Para mantener los medios de subsistencia y evitar una mayor inestabilidad, el Gobierno debe invertir sin demora más en la producción de alimentos.

Los niveles de violencia cada vez mayores, las violaciones de los derechos humanos y los abusos son alarmantes. Noruega exige una respuesta amplia del Gobierno para hacer frente a la violencia comunitaria.

La impunidad por los asesinatos, los incendios intencionales y los secuestros ha desembocado en un ciclo de injusticia e inestabilidad. Eso debe cesar. Instamos a las autoridades a que lleven a los autores ante la justicia, ya sean miembros de bandas o representantes de las fuerzas de seguridad. También observamos con preocupación que las protestas y las huelgas de los principales agentes judiciales han agravado los problemas del servicio penitenciario haitiano, contribuyendo a un hacinamiento inaceptable. Debe darse prioridad a la reforma judicial, así como a la vigilancia sistemática de la situación de los derechos humanos y la presentación de informes al respecto. La situación de las mujeres y los niños también sigue siendo alarmante. En ese sentido, hay que incrementar la protección contra la violencia sexual y de género y el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.

Si bien acogemos con agrado el hecho de que estas cuestiones se señalen a la atención del Consejo de Seguridad gracias a los exhaustivos informes sobre violaciones y abusos de los derechos humanos elaborados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), cuya labor apoyamos, alentamos a que en

los informes se dedique aún más atención al género. Noruega está absolutamente convencida de que un proceso político inclusivo, que respete los derechos humanos —incluidos los derechos de las mujeres— es indispensable para superar la crisis actual y allanar el camino hacia una sociedad más justa y estable.

Es evidente que la exclusión, el abandono y la privación de derechos crearon las condiciones que propiciaron el conflicto actual. Exhortamos al Gobierno de Haití a que apruebe el plan de acción nacional sobre los derechos humanos y vele por su aplicación, sin demora. Ello implica la participación plena, equitativa y significativa de las mujeres en todos los aspectos de la vida, incluidos los procesos políticos.

Para concluir, permítaseme reiterar que Noruega apoya plenamente a la BINUH y su labor en curso encaminada a consolidar y fortalecer la capacidad de las instituciones haitianas. Dicho esto, los medios para lograr una solución duradera siguen dependiendo de los propios haitianos.

Anexo X

Declaración del Representante Permanente de la Federación de Rusia ante las Naciones Unidas, Vassily Nebenzia

[Original: ruso]

Agradecemos a la Representante Especial del Secretario General, Sra. Meagher La Lime, la exposición informativa que nos ha ofrecido sobre la situación tan compleja en Haití y la labor de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH). Agradecemos también a la Sra. Vivianne Roc su exposición informativa y celebramos la participación del Excmo. Sr. Jovenel Moïse en la videoconferencia de hoy.

La agitación política que persiste en Haití desde hace varios meses ha sido un catalizador para el aumento de las actividades de los grupos delictivos, cuyas víctimas pertenecen a todos los sectores de la sociedad. Esto afecta especialmente a los ciudadanos de a pie, que necesitan con urgencia un Estado estable que sea capaz de responder a los numerosos problemas, desde los desastres naturales hasta los riesgos epidemiológicos. Los ciudadanos extranjeros también corren riesgos en Haití. Hoy nos ha llegado la alarmante noticia del secuestro de dos ciudadanos de la República Dominicana.

Entendemos la preocupación de los manifestantes por la seguridad de la población civil, que es la responsabilidad primordial del Gobierno. Estamos convencidos de que la situación se deterioró principalmente por la falta de consenso entre los círculos políticos. Esa polarización ya ha llevado al Parlamento a suspender su labor y ha impedido avanzar a fin de resolver de manera práctica los problemas actuales del país, especialmente los relacionados con la seguridad, por no hablar de las cuestiones humanitarias, así como de la recuperación económica y el desarrollo.

Recordemos que la situación en Haití no es única, en el sentido de que la clave de un arreglo está siempre en una solución política, que solo es posible una vez que existe un amplio diálogo interno entre las fuerzas políticas y la sociedad. En ese sentido, el Consejo de Seguridad ha confiado un papel especial a la BINUH, cuyo mandato se basa en la promoción de un diálogo interno entre los haitianos.

Anticipamos que el trabajo en ese sentido se intensificará en el período previo a los principales acontecimientos políticos de este año, a saber, las elecciones presidenciales y legislativas, así como el debate público sobre la reforma constitucional. En esta etapa crucial de la historia de Haití, debemos asegurarnos de que todos los puntos de vista se tengan debidamente en cuenta.

Acogemos con agrado la disposición del Secretario General de prestar apoyo electoral a Haití a petición del Gobierno. Sabemos que otros países de la región presentaron solicitudes similares. Sin embargo, la respuesta no siempre ha sido la misma. Pedimos que se unifiquen los criterios de este tipo de apoyo.

La última vez que el Consejo examinó la situación en Haití (véase S/2020/979), advertimos que, de persistir la práctica de la toma de decisiones unilateral, aumentaría el riesgo de escalada de la tensión. Los últimos cuatro meses no han hecho más que confirmar esos temores. El aumento de las actividades de protesta y las quejas contra el poder ejecutivo se han visto alimentadas por el vacío respecto del poder legislativo y la preocupación por la independencia del poder judicial.

Está claro que se necesita un equilibrio razonable, y solo a través de un diálogo respetuoso basado en la legislación vigente se puede llegar a un acuerdo común al respecto.

Puerto Príncipe necesita una asistencia internacional responsable a fin de evitar una mayor división social e impedir que la situación desencadene una crisis humanitaria a escala regional. En su condición de miembro del Consejo de Seguridad,

Rusia seguirá trabajando para garantizar que la asistencia de las Naciones Unidas se traduzca en una verdadera normalización de la situación en Haití, fortaleciendo su soberanía y autosuficiencia.

Anexo XI

Declaración de la Representante Permanente de San Vicente y las Granadinas ante las Naciones Unidas, Inga Rhonda King

Tengo el honor de formular esta declaración en nombre de los tres Estados africanos miembros del Consejo de Seguridad, a saber, Kenya, el Níger y Túnez, así como de San Vicente y las Granadinas (A3+1). Agradecemos a la Representante Especial del Secretario General, Sra. Helen Meagher La Lime, su exposición informativa, y valoramos los esfuerzos de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) en el proceso de estabilización del país. Expresamos también nuestro agradecimiento a la Directora de Plurielles Haiti, Sra. Vivianne Roc, por su exposición informativa y damos la bienvenida al Presidente de la República de Haití, Excmo. Sr. Jovenel Moïse.

Dentro de un mes, el mundo conmemorará el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. También celebraremos el legado del pueblo de Haití como primera nación negra que consiguió la independencia superando el colonialismo y la esclavitud.

Sin embargo, la situación actual en Haití es extremadamente inquietante. Desde nuestra última sesión (véase S/2020/979), persiste el *statu quo* en nuestra hermana nación caribeña, continúa el bloqueo político, la situación de seguridad es precaria y la situación socioeconómica y humanitaria sigue deteriorándose. La imprevisibilidad está muy presente y nos preocupa sumamente que el estancamiento político cada vez mayor haya colocado al país al borde de un precipicio.

En ese sentido, nos hacemos eco del llamamiento de la Comunidad del Caribe (CARICOM) que anima a todas las partes a entablar un diálogo significativo en interés de la paz y la estabilidad, e insta encarecidamente a que se tomen medidas para fomentar un entorno seguro, la vuelta a la normalidad y la construcción de instituciones democráticas sostenibles.

El A3+1 sigue muy de cerca la situación sumamente polarizada y está preocupado por el hecho de que desde enero de 2020 no exista un Parlamento a consecuencia de no haberse organizado elecciones legislativas, que deberían haberse celebrado hace tiempo. Sin embargo, valoramos que se haya elaborado un calendario electoral y alentamos a los agentes políticos haitianos a que tomen medidas, entre ellas la finalización de los arreglos logísticos, para garantizar la celebración de unas elecciones libres, imparciales, inclusivas, transparentes y creíbles.

Subrayamos además la necesidad de defender el estado de derecho y los procesos electorales, y resaltamos la importancia de guiarse por la letra y el espíritu del orden constitucional, al tiempo que se sitúan en primer plano las necesidades y los intereses de la población.

Sostenemos que cualquier solución de la crisis actual debe estar dirigida por los haitianos y ser asumida por estos como propia. Entendemos que hay opiniones muy divergentes y que las tensiones son elevadas. Por ello, es fundamental que las partes dejen de lado sus discrepancias, lleguen a un consenso y determinen una manera viable de avanzar. Asimismo, instamos a los dirigentes políticos a que entablen un diálogo nacional e inicien un período de reconciliación nacional.

En lo que respecta a la seguridad, estamos consternados por el recrudecimiento de la violencia, en particular por el flagelo de las actividades delictivas relacionadas con las bandas, en particular los secuestros. También nos preocupan los informes sobre la participación de policías deshonestos en la coordinación de bandas violentas y pedimos que se investigue de forma exhaustiva y se responsabilice a los culpables. Reiteramos nuestro apoyo a la Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración en la reducción de la violencia comunitaria y alentamos al Gobierno a

que emprenda rápidamente medidas para aprobar el proyecto de estrategia nacional sobre la reducción de la violencia comunitaria. Esa estrategia reforzaría el mecanismo de seguridad del Estado para combatir las actividades delictivas.

Además, acogemos con beneplácito la asignación de recursos a la Policía Nacional de Haití. Es fundamental que se fortalezca esa institución esencial para garantizar el cumplimiento de su mandato, en particular la desarticulación de redes y organizaciones delictivas, como el G9.

El vínculo entre la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible se entrelaza con la situación de los derechos humanos en Haití. El grupo A3+1 lamenta las violaciones constantes de los derechos humanos, sobre todo de los grupos más vulnerables, y pide que haya rendición de cuentas y se ponga fin a la impunidad. Sigue siendo indispensable que se haga justicia a todas las víctimas de las atrocidades, entre ellas al difunto Monferrier Dorval. A ese respecto, subrayamos la importancia de respetar el derecho internacional de los derechos humanos.

Más concretamente, lamentamos la falta de avances en las investigaciones judiciales de los casos Livalois, Grand Ravine, La Saline, Bel-Air y Pont-Rouge-Cité Soleil, así como la imposibilidad de ejecutar las órdenes pendientes contra miembros notorios de las bandas, como Jimmy Cherizier.

De hecho, la falta de rendición de cuentas facilita la continuación de la violencia relacionada con las bandas. Por lo tanto, instamos a las autoridades a que no escatimen esfuerzos para que se haga justicia a las víctimas. La aprobación del plan de acción nacional sobre derechos humanos, refrendado por el Comité Interministerial de Derechos Humanos en diciembre de 2019, ayudaría en ese sentido.

Las realidades socioeconómicas y humanitarias requieren la asistencia urgente de la comunidad internacional y la puesta en práctica del nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y la paz. En consecuencia, es esencial que los países donantes sigan contribuyendo al plan de respuesta humanitaria de Haití para 2021-2022.

La comunidad internacional tiene la tarea fundamental de prestar un apoyo integral a Haití para que pueda paliar sus complejos problemas y su legado de subdesarrollo. Ya es hora de que iniciemos el proceso de diálogo sobre la compensación por los legados del subdesarrollo en Haití.

Tanto la historia antigua como la reciente nos han enseñado que la paz y el desarrollo son inseparables. El pueblo haitiano ya ha sufrido bastante. Merece vivir en condiciones de paz. Merece un futuro que ofrezca prosperidad. Exhortamos a todas las partes interesadas a que, por difícil y complejo que sea, entablen un diálogo constructivo y trabajen de consuno para construir un Haití mejor.

El grupo A3+1 reitera su apoyo a la BINUH, a la CARICOM y a la Organización de los Estados Americanos y renueva su llamamiento para que esas organizaciones y la comunidad internacional en general sigan acompañando a Haití en el logro de la estabilidad política y socioeconómica.

Kenya, el Níger, San Vicente y las Granadinas y Túnez se solidarizan con el pueblo de Haití.

Anexo XII

Declaración del Representante Permanente Adjunto del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las Naciones Unidas, Jonathan Allen

El Reino Unido acoge con satisfacción la labor de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) y de la Representante Especial del Secretario General, Sra. Meagher La Lime, en particular sus esfuerzos por garantizar una respuesta más integrada de las Naciones Unidas a los problemas polifacéticos de Haití.

Al mismo tiempo, seguimos sumamente preocupados por el panorama político, social y humanitario y por el arraigo de los problemas a los que se enfrenta la población haitiana.

El estancamiento político constante también suscita una gran preocupación. En lo que debería ser un año de renovación democrática para el pueblo haitiano, hacemos un llamamiento a todos los agentes políticos para que trabajen de consuno y encuentren un terreno común, a fin de establecer las condiciones adecuadas para que los procesos democráticos sean satisfactorios.

En ese contexto, acogemos con beneplácito el compromiso de la BINUH de respaldar y facilitar los procesos democráticos en 2021, en estrecha colaboración con las instituciones haitianas principales. Nos hacemos eco de los llamamientos formulados en el informe del Secretario General (S/2021/133) en los que se alienta a las autoridades nacionales a no escatimar esfuerzos para superar los retos logísticos de las elecciones, en particular el registro de los ciudadanos.

Compartimos la preocupación del Secretario General por el deterioro de la situación de los derechos humanos, en especial por el alarmante aumento de los secuestros y la violencia relacionada con las bandas. Me hago eco de la preocupación de mis colegas por los informes recientes sobre secuestros de ciudadanos de la República Dominicana. Se corre el riesgo de que la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos socave la estabilidad del país y ponga en peligro la vida de los haitianos.

Seguimos preocupados por la situación humanitaria, en particular por la gran vulnerabilidad de las mujeres y los niños, que se ve agravada por las amenazas económicas y sanitarias que plantea la enfermedad por coronavirus. Alentamos a todos los agentes a que colaboren con la comunidad internacional y las Naciones Unidas para afrontar esos problemas, en beneficio del pueblo haitiano.

Anexo XIII

Declaración del Representante Alterno Interino para Asuntos Políticos Especiales de la Misión Permanente de los Estados Unidos de América ante las Naciones Unidas, Jeffrey DeLaurentis

Doy las gracias a la Representante Especial Meagher La Lime por sus actualizaciones sobre la situación en Haití y por los enormes esfuerzos que tanto ella como su equipo han desempeñado. Doy las gracias a la Sra. Roc por su exposición informativa y por recordarnos la necesidad urgente de centrarnos en los problemas a los que se enfrentan los jóvenes de Haití. Damos la bienvenida al Consejo de Seguridad al Presidente Moïse y agradecemos su participación en el día de hoy.

Permítaseme comenzar con algo que todos sabemos: las elecciones legislativas deberían haberse celebrado en Haití en octubre de 2019. Tanto antes como después de esa fecha, los miembros del Consejo instaron en repetidas ocasiones a las partes políticas interesadas de Haití a que se reunieran, dejaran de lado sus divergencias y encontraran la manera de abordar los problemas más acuciantes de Haití. Decidieron no hacerlo. No obstante, la responsabilidad de crear un entorno propicio para la celebración de elecciones libres y limpias y de llevarlas a cabo debe recaer, en última instancia, en el Gobierno.

A los Estados Unidos les preocupa que continúe el período prolongado de gobierno por decreto en Haití. Consideramos que los decretos deben limitarse a las medidas necesarias para las funciones esenciales, la seguridad y la celebración de elecciones. Sin embargo, las medidas adoptadas recientemente por las que se ha destituido y nombrado de manera unilateral a tres jueces del Tribunal Supremo, por las que se ha creado una agencia nacional de inteligencia y por las que se limita el papel del organismo de auditoría independiente de Haití pueden perjudicar las instituciones democráticas fundamentales del país.

De nuevo, exhortamos al Gobierno de Haití a que celebre lo antes posible las elecciones legislativas atrasadas para restablecer la función constitucional del Parlamento. El pueblo haitiano merece tener la oportunidad de elegir a sus dirigentes y restaurar las instituciones democráticas del país. Aunque reconocemos que todavía queda mucho por hacer, 2021 debe ser el año en que se celebren las elecciones legislativas y presidenciales en Haití.

Al mismo tiempo, encomiamos la decisión que tomó en septiembre el Gobierno de Haití de aumentar el presupuesto de la Policía Nacional de Haití, que lleva mucho tiempo sufriendo la falta de recursos. No obstante, a pesar de dirigir una mayor atención al cumplimiento de la ley, como se ha señalado, la violencia de las bandas continúa siendo un problema grave, habida cuenta de que los secuestros aumentaron en más de un 200 % en 2020 y los homicidios también van en aumento.

Exhortamos a las autoridades haitianas a que redoblen sus esfuerzos para investigar y enjuiciar los delitos violentos, en particular la violencia sexual y de género, a que refuercen las prácticas relativas a la policía de proximidad y a que salvaguarden los derechos humanos de los residentes de los barrios controlados por las bandas.

Asimismo, nos preocupa la falta constante de rendición de cuentas antes las violaciones y los abusos de los derechos humanos. En diciembre, los Estados Unidos sancionaron a tres exfuncionarios haitianos en virtud de la Ley Global Magnitsky sobre Rendición de Cuentas en materia de Derechos Humanos por el papel que desempeñaron en el ataque de 2018 en La Saline, en el que murieron por lo menos 71 personas.

Sin embargo, La Saline, Bel-Air y el asesinato de Monferrier Dorval en agosto ponen de manifiesto la necesidad urgente de acabar con la impunidad, empezando por medidas concretas para proteger a los ciudadanos de la violencia mediante una actuación policial eficaz y la resolución oportuna de los casos penales. También merece la pena considerar la elaboración y aplicación de una estrategia nacional para la investigación, el enjuiciamiento penal y la resolución de casos de delitos graves, con el apoyo que corresponda.

Los Estados Unidos continúan alentando y promoviendo el establecimiento de un sector judicial independiente, creíble y eficaz en Haití. Nos preocupan los decretos que socavan el poder judicial y las huelgas intermitentes por parte de agentes judiciales esenciales, que siguen afectando negativamente al funcionamiento del poder judicial y limitan el número de audiencias y procedimientos judiciales celebrados. Un sector judicial que funcione plenamente es fundamental para luchar contra la impunidad y la corrupción y para reducir los niveles endémicamente altos de prisión preventiva prolongada.

Todo ello tiene como telón de fondo la desaceleración económica de Haití, que se ha visto agravada por la pandemia de enfermedad por coronavirus. La inestabilidad económica, la escasez recurrente de combustible y la inseguridad alimentaria aguda se han combinado para entorpecer los avances hacia el desarrollo y empeorar una situación humanitaria ya de por sí grave.

El 11 de enero, los Estados Unidos anunciaron una ayuda adicional de 75,5 millones de dólares para el desarrollo de Haití. Esa nueva financiación se utilizará para ejecutar en Haití programas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en esferas tan diversas como la salud, la educación, la seguridad alimentaria, el desarrollo agrícola, el agua y el saneamiento y la gobernanza. Continuaremos trabajando junto con el Gobierno de Haití, la sociedad civil y nuestros asociados para lograr el desarrollo sostenible y ayudar a que Haití permanezca en la senda de la autosuficiencia.

Permítaseme concluir reiterando la necesidad de poner fin de inmediato al actual período de gobierno por decreto. Solo con la presencia de un Gobierno estable, democrático y plenamente representativo se pueden abordar de forma productiva cuestiones como la violencia, la corrupción y los abusos de derechos civiles y humanos.

Los Estados Unidos seguirán respaldando a Haití en sus esfuerzos por construir un futuro mejor.

Anexo XIV

Declaración de la Representante Permanente Adjunta de Viet Nam ante las Naciones Unidas, Nguyen Phuong Tra

Ante todo, damos una cálida bienvenida a esta sesión al Presidente de Haití, Excmo. Sr. Jovenel Moïse.

Quisiera dar las gracias a la Representante Especial, Sra. Helen Meagher La Lime, por su ilustrativa exposición informativa y a todo el personal de las Naciones Unidas por su dedicación en estos momentos tan difíciles. También deseo dar las gracias a la Sra. Vivianne Roc por informarnos sobre los últimos acontecimientos sociales en Haití.

Nos preocupa la falta de progresos en diversas esferas en Haití, según se describe en el informe del Secretario General (S/2021/133). La violencia continuada y la creciente oleada de secuestros, en particular la delincuencia relacionada con las bandas, en algunas partes del país han hecho aumentar la inestabilidad que ya existía. Las divisiones dentro de su sistema político y el fracaso del diálogo para llegar a un acuerdo político han intensificado aún más el estancamiento político actual y continúan siendo enormes impedimentos para la población de Haití.

En ese sentido, quisiera recalcar las tres cuestiones siguientes.

En primer lugar, en lo que respecta a la situación de la seguridad, nos preocupan una serie de amenazas y problemas de larga data, sobre todo el aumento reciente del nivel de violencia relacionada con las bandas y los secuestros en algunas partes de Haití. Las mujeres, los niños y otros grupos vulnerables siguen corriendo el riesgo de ser víctimas de la violencia y continúan marginados en la vida política del país. En ese sentido, estamos sumamente preocupados por la noticia de que un equipo de rodaje sufrió un ataque el fin de semana pasado en Haití y dos ciudadanos dominicanos del equipo fueron retenidos como rehenes.

Condenamos enérgicamente la violencia y los ataques que se están produciendo. Si bien los esfuerzos que están llevando a cabo para hacer frente a la criminalidad son encomiables, instamos al Gobierno de Haití y a las autoridades locales a que cumplan sus responsabilidades relativas al desmantelamiento de las bandas y las organizaciones delictivas. También deben adoptarse otras medidas para poner fin a la violencia y proteger mejor a los grupos vulnerables, en particular a las mujeres y los niños, tanto de los efectos negativos del estancamiento político como de las dificultades socioeconómicas.

Para seguir avanzando, nos hacemos eco del llamamiento del Secretario General a las autoridades haitianas para que establezcan un marco nacional integral de gestión de armas y municiones de acuerdo con los instrumentos, las normas y las directrices internacionales pertinentes de control de armas.

En segundo lugar, en lo que respecta al progreso político, la polarización entre los agentes políticos y el calendario electoral no programado han seguido siendo los mayores problemas que obstaculizan las reformas constitucionales, lo que representa una de las causas fundamentales de la inestabilidad de Haití y alimenta las protestas contra el Gobierno.

En ese contexto, el año 2021 es un hito para Haití, sobre todo en cuanto a la celebración de elecciones. Por lo tanto, instamos a todas las partes implicadas a que se esfuercen más por alcanzar un acuerdo político sobre las modalidades y el calendario de las elecciones de modo que sean aceptables para todas las partes interesadas de Haití, en particular la representación política de las mujeres y los jóvenes.

Reiteramos la posición declarada con anterioridad que consiste en pedir a las Naciones Unidas y la comunidad internacional que prioricen de manera urgente y sin condiciones los recursos con el fin de respaldar la organización de esas elecciones en un entorno pacífico y que aumenten la asistencia necesaria para proteger a los ciudadanos haitianos en lo sucesivo.

En tercer lugar, en lo que respecta a la reconciliación, quisiéramos subrayar la importancia de la unidad nacional de Haití a medida que se avanza. Hacemos un llamamiento a las autoridades haitianas y a todas las demás partes implicadas para que concedan la máxima prioridad a los intereses del pueblo y demuestren un espíritu de entendimiento y confianza mutuos en aras de superar las diferencias actuales. Consideramos que esa es la manera viable de encontrar un terreno común y una salida pacífica al estancamiento político de Haití.

Por último, pero no menos importante, encomiamos los incansables esfuerzos de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití y del equipo de las Naciones Unidas en el país, y quisiéramos reiterar nuestro apoyo al pueblo haitiano en la búsqueda de la paz, la seguridad, la unidad y el desarrollo del país.

Anexo XV

Declaración del Presidente de Haití, Jovenel Moïse

[Original: francés]

Me complace que se me haya brindado la oportunidad de dirigirme al Consejo de Seguridad, este augusto e importante órgano de las Naciones Unidas al que se le ha confiado la elevada responsabilidad de velar por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Las numerosas sesiones celebradas por el Consejo sobre la situación en Haití reflejan el gran interés que las Naciones Unidas confieren al país. Expresamos nuestro sincero agradecimiento al Consejo de Seguridad y a sus miembros por esa gran atención prestada.

Quisiera saludar en particular a la Embajadora del Reino Unido, Sra. Barbara Woodward, que ocupa la Presidencia del Consejo durante el mes de febrero de 2021, y felicitarla por la manera excelente en la que está dirigiendo la labor del Consejo. También le deseo el mayor de los éxitos en esas funciones.

A continuación, quisiera reiterar mi profundo agradecimiento a nuestra Organización por el apoyo continuo e infalible que ha prestado a mi país en su búsqueda de la estabilidad política y el desarrollo socioeconómico sostenible. A ese respecto, acojo con entusiasmo el compromiso personal del Secretario General y reitero el enorme agradecimiento del pueblo haitiano.

Doy las gracias también a la Representante Especial del Secretario General para Haití por sus múltiples consejos útiles y su estrecha colaboración con mi Gobierno. Asimismo, un rindo un merecido homenaje al personal de las Naciones Unidas desplegado en Haití por el inestimable apoyo que ha prestado al país en todos los ámbitos.

Expreso mi sincero agradecimiento a las naciones amigas y a otros asociados de la comunidad internacional, que han demostrado su solidaridad activa con Haití y su pueblo en los momentos difíciles que el país ha vivido a lo largo de su historia reciente, y que sigue viviendo.

Felicito al Secretario General por el informe completo y equilibrado que ha presentado al Consejo de Seguridad sobre la situación en Haití (S/2021/133), que ofrece una imagen cabal de la crisis política que sigue obstaculizando el buen funcionamiento de las instituciones y socavando la estabilidad del país. Los datos presentados en el informe reflejan la realidad actual del país, y las observaciones del informe me parecen muy pertinentes. Mi Gobierno los ha examinado con sumo interés y ha tomado debida nota de las recomendaciones formuladas.

Me complace en particular el hecho de que el informe pone de relieve las diversas medidas adoptadas por mi Gobierno para corregir la situación en el país. Mi intervención de hoy me permitirá esclarecer mejor los hechos que recoge el informe y dar a conocer las opiniones del Gobierno de la República sobre las observaciones que en él figuran.

El año 2020 fue un período de desafíos para mi Gobierno, que tuvo que adoptar medidas extraordinarias para proteger a nuestra población contra la pandemia de enfermedad por coronavirus, que comenzó el 19 de marzo de 2020. Se elaboró una estrategia integral. Muy pronto, mi Gobierno cerró los puertos y los aeropuertos y reforzó el control de fronteras.

Las medidas sociales y económicas permitieron a muchos ciudadanos respetar el confinamiento y cumplir las disposiciones sanitarias con miras a detener la propagación del virus. Entre estas medidas se encontraba el pago de los sueldos de 100.000 maestros, 10.000 profesores universitarios y 65.000 obreros; la distribución

de 23 millones de mascarillas fabricadas en Haití y de productos alimentarios a más de 1 millón de familias vulnerables; y el envío electrónico de transferencias directas en efectivo a 300.000 familias vulnerables.

Para reforzar su sistema sanitario y apoyar mejor a los hospitales, los dispensarios y los centros de salud, el Gobierno encargó más de 473 toneladas de material médico. Se crearon centros especiales para recibir los primeros casos de coronavirus. La movilización nacional para educar a la población sobre el coronavirus y las medidas de prevención que debían adoptarse fue un éxito total.

En la actualidad, nuestro país tiene 12.039 casos confirmados y 9.529 casos tratados. Lamentablemente, 247 haitianos han fallecido a causa de la pandemia. Aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestro más sincero pésame a las familias en duelo.

Hoy Haití es uno de los tres países caribeños que mejor ha gestionado esta pandemia, que ha aumentado el gasto social del Estado y ha generado considerables pérdidas económicas. En este sentido, apoyamos la propuesta de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo de anular 1 billón de dólares en concepto de deuda a 64 países, incluido el nuestro. Necesitamos este alivio para que haya alguna posibilidad de recuperación económica.

Las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA) ayudaron en las elecciones de Haití de 2016-2017, que fueron transparentes y respetaron las normas internacionales. El pueblo haitiano agradece este apoyo, que permitió un traspaso pacífico de poder.

Si bien la mayor amenaza a la democracia en el siglo XX fue el golpe de Estado militar, a principios del siglo XXI, los perversos perdedores de las elecciones, los oligarcas corruptos y una pandemia plantean graves peligros para los logros democráticos. Si bien en el siglo pasado la resolución 1080 de la Asamblea General de la OEA, aprobada en Chile en 1991, y la Carta Democrática Interamericana, establecida el 11 de septiembre de 2001 en el Perú, frenaron los golpes militares en América Latina y el Caribe, hoy es preciso reflexionar y hacer recomendaciones para enfrentar a quienes impugnan los resultados de elecciones libres, honestas y transparentes, y a los poderosos oligarcas que se consideran Dios.

Desde que presté juramento el 7 de febrero de 2017, la negativa de algunos agentes políticos a aceptar los resultados de elecciones libres, limpias y transparentes y los reiterados intentos violentos de interrupción del orden constitucional por parte de oligarcas corruptos, que se oponen a las reformas económicas en favor del pueblo, han generado dificultades para la situación de la población y el entorno político. A menudo, los derechos de los ciudadanos se han visto vulnerados por la violencia que se les ha impuesto, todo ello en un contexto donde la pandemia hace estragos.

Se acaba de publicar el *Índice de Democracia 2020*. Indica un descenso récord en índice de democracia en todo el mundo, debido en gran medida a la pandemia. Haití desciende de 4,57 a 4,22, pero solo baja un puesto (del centésimo quinto al centésimo sexto) en la clasificación, lo cual sugiere una relativa estabilidad para Haití, cuya puntuación sigue siendo la tercera más alta desde 2006 y la primera publicación del *Índice*. Lo mismo ocurre con la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, que sitúa a Haití en el puesto 83, de 189. A pesar de las dificultades que afrontamos, la democracia marcha bien en Haití.

Mi Gobierno tiene que hacer frente a un sistema económico, que permite el saqueo sistemático del Estado por oligarcas poderosos y el empobrecimiento de la población. Para corregir esta situación, hemos propuesto el diálogo con los sectores afectados para encontrar un consenso operacional. No querían que el sistema

cambiara. No obstante, hemos llevado a cabo reformas en el sector de la energía, en especial en la electricidad y la adquisición de productos derivados del petróleo, así como en la gestión y la construcción de infraestructuras viales. Acabamos con la manipulación de la moneda y modificamos la política agrícola. Pusimos fin a los contratos corruptos. Estos casos suponen más de 6.000 millones de dólares en intereses. Por lo tanto, nos enfrentamos a un poderoso grupo de presión que cuenta con cuantiosos recursos.

En respuesta, desde hace casi tres años los oligarcas corruptos, en alianza con los perversos perdedores, han bloqueado el funcionamiento normal del Senado de la República mediante la violencia, impidiendo la ratificación de Gobiernos, una votación sobre el presupuesto y una votación sobre la ley electoral tendiente a facilitar la celebración de elecciones para renovar el personal político. Además, la operación *peyi lòk* de la oposición radical y violenta atentó contra los derechos fundamentales de los ciudadanos al impedirles realizar sus actividades. La operación *peyi lòk* también ocasionó graves daños económicos, con la pérdida de casi 2.400 millones de dólares y cerca de 80.000 puestos de trabajo. Además, en 2020, la pandemia acarreó graves consecuencias para el país.

En cuatro años, mi Gobierno ha tenido que hacer frente a siete intentos de interrupción del orden constitucional mediante la violencia. El violento ataque contra el Senado de nuestro país, perpetrado el 11 de septiembre de 2019 por bandas radicales de la oposición, para impedir que cumpla con sus obligaciones constitucionales, fue indignante. La creación de numerosas bandas y de un grupo terrorista, Fantom 509, integrado por numerosos policías que causaron baja por tráfico de drogas y otros delitos, que han atacado a la policía nacional, la Oficina del Primer Ministro, a varios otros ministerios y a otras instituciones del Estado, es uno de los numerosos peligros que nuestra democracia ha tenido que enfrentar en los últimos meses.

El ejemplo más reciente es la tentativa de golpe de Estado del 7 de febrero de 2021. Cuando hayan concluido la investigación policial y el proceso judicial, compartiremos el informe con la Organización. En la base de todo ello está el rechazo del régimen democrático y de las elecciones como único medio para acceder a la gestión de los asuntos del Estado. Ese es el motivo de que los infatigables esfuerzos de mi Gobierno por apaciguar el clima sociopolítico y facilitar una solución de consenso mediante el diálogo hayan sido rechazados por algunos, que han preferido optar por la violencia política, la parálisis y el caos, a la espera de que esa estrategia conduzca a un golpe de Estado que instaure un Gobierno de transición sin un mandato emanado del pueblo.

En respuesta a esa política del caos, el Gobierno de mi país aplicó una estrategia de desmantelamiento de las bandas. Su primer componente es la Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración, que ha tenido un éxito limitado. El segundo componente es el fortalecimiento de las capacidades de la policía y el desmantelamiento contundente de las bandas. De las 102 bandas existentes, el Gobierno ha desmantelado 64, y se han acelerado las tareas de restablecimiento de la seguridad. El número de secuestros ha experimentado una disminución considerable, y la población apoya la labor de la Policía Nacional. La mayoría de esas bandas cuentan con el apoyo de oligarcas corruptos.

Comprendo muy bien las inquietudes que se expresan en el informe respecto de la inseguridad existente en el país en los últimos 12 meses. Hay que reconocer que la Policía Nacional de Haití, con las nuevas normas de gobernanza introducidas recientemente, trabaja arduamente con miras a restablecer el orden en todo el territorio nacional. Se han llevado a cabo cambios importantes en el nivel de mando de la institución policial. Varias redes de bandas están ya desmanteladas. Se están aplicando medidas en diversos lugares del país para neutralizar a los grupos

armados y restablecer la seguridad en todo el territorio. La policía ha sabido resistir a las propuestas de corrupción planteadas por oligarcas que pretendían causar una implosión de la institución policial, lo cual habría afectado profundamente al futuro de nuestra democracia. La removilización del ejército sigue avanzando. El ejército ha prestado apoyo a las operaciones de la policía contra las bandas.

Como se señala en el informe,

> "La parte del presupuesto nacional global destinada a la policía nacional alcanzó el 6,59 %. El presupuesto policial reforzado […] representa un aumento del 53 % respecto del ejercicio 2019/20" (*S/2021/133*, *párr. 25*).

La mejora de las condiciones de vida de los agentes de policía ha sido un factor central de las decisiones adoptadas.

Celebramos que algunos países amigos, como los Estados Unidos de América, Francia y Colombia, presten apoyo al fortalecimiento de las capacidades del país en el marco de la lucha contra los secuestros. Gracias al respaldo de los organismos de las Naciones Unidas, hemos establecido un mecanismo nacional para la gestión de las armas y las municiones, de conformidad con la legislación nacional vigente y con los instrumentos internacionales en los que Haití es parte.

Reconocemos que el fortalecimiento del sistema judicial es un elemento esencial de la lucha contra la inseguridad y contra la delincuencia organizada. En ese sentido, el Gobierno ha dotado recientemente a los agentes del sistema de herramientas jurídicas más efectivas para luchar contra ese fenómeno. Para fortalecer el estado de derecho y consolidar el aparato de la seguridad, y a falta de un Parlamento funcional, he tenido que aprobar algunos decretos que se enmarcan en la lucha contra la delincuencia organizada, contra la inseguridad galopante y contra los secuestros. Soy el quinto Presidente de Haití, desde 1987, que recurre a esa herramienta para atender las necesidades de nuestra población. Seguiré haciendo un uso limitado de dicha herramienta hasta que se haya elegido un nuevo Parlamento y el quincuagésimo noveno Presidente de la República haya tomado posesión de su cargo el 7 de febrero de 2022. Como medida adicional enmarcada en los esfuerzos orientados a fortalecer el sistema judicial, hemos incrementado el presupuesto para 2020-2021 del Consejo Superior de la Judicatura en un 35 %, en comparación con el del ejercicio fiscal anterior.

Las graves consecuencias del presente clima de violencia para la sociedad haitiana, el funcionamiento de las instituciones y la economía del país se subrayan con contundencia en el informe conjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH). En dicho informe, titulado "Unrest in Haiti: Their impact on Human Rights and the State's obligation to protect all citizens" y publicado el 18 de enero de 2021, se documentan

> "las violaciones y conculcaciones de los derechos humanos perpetradas en el territorio haitiano en el marco de las manifestaciones que tuvieron lugar entre el 6 de julio de 2018 y el 10 de diciembre de 2019".

En los próximos 15 días y tras el Consejo de Ministros, el Gobierno de mi país publicará el informe nacional sobre la situación de los derechos humanos en Haití. Todos los casos mencionados han sido investigados por la Dirección Central de la Policía Judicial. Una vez establecidos los hechos, esos casos se remitieron al Comisionado del Gobierno, quien, tras su solicitud de información, trasladó el expediente a la Oficina de Investigación, la cual designará a un juez. Una vez que el caso haya sido debidamente trasladado al poder judicial, el poder ejecutivo no tendrá autoridad para intervenir.

Gracias a la formación proporcionada por las Naciones Unidas, los policías haitianos demuestran profesionalidad en el ejercicio de sus funciones. Sus intervenciones siempre se llevan a cabo de conformidad con las reglas de actuación policial. Cuando se produce alguna desviación, se remite a la Inspección General para que lleve a cabo el seguimiento necesario. Asimismo, cabe mencionar que, a menudo, los miembros de las bandas se hacen pasar por manifestantes y periodistas para agredir a nuestros policías en ejercicio del deber. Esta práctica es peligrosa tanto para los policías como para los manifestantes pacíficos. El Gobierno de mi país desea mejorar su puntuación, pasando de 83 a 189, en la próxima Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. Por eso seguimos siendo transparentes con los periodistas.

Los miembros del Consejo habrán observado que en el informe se mencionan los llamamientos de una parte de la oposición política en favor de la dimisión del Presidente de la República antes de la fecha de finalización de mi mandato constitucional, el 7 de febrero de 2022. Esa demanda ya se planteó en el diálogo mantenido en la Nunciatura Apostólica de Haití en enero de 2020, con la intención de forzar un golpe de Estado. El miedo de las elecciones y del voto de la población explica esas tentativas golpistas de instaurar una transición que no se sustente en la voluntad popular. Los resultados de las últimas seis elecciones organizadas en Haití demuestran que la gran mayoría de esos agentes políticos no llegan nunca a superar la barrera del 1 % de los votos. El gran desafío, para todos, es cómo consolidar una democracia con agentes políticos que tienen miedo de las elecciones y de los resultados de una votación popular. Es decir, cómo consolidar una democracia con agentes incapaces de formar una coalición para llegar a constituirse como alternativa. Yo gané las elecciones frente al candidato presidencial de la oposición porque apelé al voto del pueblo.

Ese rechazo sistemático de la alternancia política por la vía de las urnas constituye una fuente de tensiones permanentes en el país y, además, supone un grave peligro para la apuesta por la democracia que realizó el pueblo haitiano en 1987, al dejar atrás la dictadura. Nos enfrentamos a una oposición política que carece tanto de alternativas democráticas como de cualquier proyecto social creíble para la población de las ciudades y de las zonas rurales. Esa oposición rechaza la vía electoral para acceder al poder. Dado que dimos la espalda a la dictadura para abrazar la democracia como régimen político, debemos someternos a todas sus exigencias. La celebración de elecciones es una de las reglas fundamentales de la democracia. Un representante electo debe ser sustituido por otro representante electo. Queremos y debemos trabajar para salvaguardar los logros democráticos. La transición siempre es conveniente para una oligarquía política y económica a la que le gusta “nadar en aguas turbulentas”, como suelo decir.

En estricto cumplimiento del mandato constitucional de cinco años que me otorgó el pueblo haitiano, y desde que juré el cargo el 7 de febrero de 2017, he mantenido mi decisión de garantizar la estabilidad política, aportar un cambio duradero a las condiciones de vida del pueblo y a allanar el camino para el desarrollo socioeconómico sostenible de la nación. Es con esta perspectiva que trabajo para lograr las reformas estructurales e institucionales que son imprescindibles para la consolidación de las conquistas democráticas, la preservación del estado de derecho y la reforma a fondo del Estado, de manera que por fin esté al servicio de toda la población, y no solo de un pequeño grupo. El proceso de reforma constitucional en curso y la organización de elecciones a todos los niveles durante 2021, con vistas a renovar los representantes políticos y garantizar el relevo democrático el 7 de febrero de 2022, forman parte de ese proceso.

Las elecciones de abril y septiembre ofrecerán la oportunidad de avanzar de forma decisiva en el proceso de democratización que tiene lugar en el país. El establecimiento del nuevo Consejo Electoral Provisional, de conformidad con los

criterios establecidos en la Constitución, ha sido un paso importante para la realización de esas elecciones. Según el calendario electoral propuesto por el Consejo Electoral Provisional, el referéndum se celebrará el próximo mes de junio y la primera vuelta de las elecciones el 19 de septiembre.

He tomado nota de las preocupaciones expresadas por el Secretario General en su informe sobre el frágil entorno político, la situación de la seguridad y las dificultades logísticas y financieras. Los Gobiernos anteriores tuvieron situaciones similares y de todos modos cumplieron sus promesas. Mi Administración y mi Gobierno tienen la intención de hacer todo lo posible para mejorar el clima sociopolítico a fin de garantizar el cumplimiento de los plazos y que las elecciones puedan celebrarse en condiciones óptimas y con la más amplia participación de candidatos y votantes. El Gobierno de Haití ya ha aportado 20 millones de dólares al fondo colectivo. De esta fecha a abril, el Gobierno haitiano volverá a aportar otros 20 millones de dólares.

Deseo aprovechar esta oportunidad para agradecer a la comunidad internacional —en particular a las Naciones Unidas, a través de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH)— su apoyo al proceso electoral en curso en el país, expresado mediante la firma, el 21 de enero, de un protocolo de apoyo técnico y financiero al proceso electoral.

Asimismo, la reforma constitucional que todo el país reclama se está haciendo realidad con la creación del Comité Consultivo Independiente compuesto por cinco miembros, que supervisa la elaboración de un proyecto de constitución que se está consultando a nivel de base antes de someterlo a referéndum en junio.

El pueblo haitiano está escribiendo una nueva página de su historia. La necesidad de una nueva constitución se ha hecho sentir desde hace mucho tiempo. Como se destaca en el informe de la BINUH, la Constitución de 1987, enmendada en 2012 y actualmente en vigor, es una fuente de inestabilidad política y un gran obstáculo para el desarrollo del país. Eso es un hecho y sigue siendo una constante en el discurso de todos los agentes que participan en la vida nacional. Hablamos de un proyecto del pueblo haitiano, que aspira a un cambio real. Según las dos últimas encuestas de opinión realizadas en el país a finales de 2020, más del 86 % de la población desea una nueva Constitución.

Ya he invitado a la población a votar de manera masiva a favor de esta nueva constitución en el referéndum que se celebrará en junio. El Comité Consultivo Independiente que supervisa la redacción de la nueva Constitución, creado el 15 de octubre, ya ha presentado su primer proyecto.

Al inicio de mi mandato, declaré sin ambigüedad que mi objetivo era sentar las bases del desarrollo socioeconómico de Haití y poner fin, de una vez por todas, al largo período de transición que atraviesa el país desde el fin de la dictadura en 1986, hace 35 años. Así, mi Gobierno puso en marcha grandes proyectos que pudieran suponer un cambio sustancial y duradero en el país y en la calidad de vida de nuestro pueblo, hablo por ejemplo de carreteras, electricidad, agricultura, medio ambiente y reforma administrativa, todo ello con los escasos recursos disponibles y los impuestos que pagan los ciudadanos. Solicito aquí el apoyo técnico y financiero de nuestros asociados para avanzar con mayor rapidez.

Los resultados de esta política han comenzado a materializarse. Sin embargo, la inestabilidad política, sobre todo las manifestaciones violentas y los bloqueos, ha tenido repercusiones desastrosas en la economía del país. Además, los problemas climáticos como la sequía y las inundaciones han afectado negativamente a las cosechas y han creado una crisis alimentaria que afecta a más de 4 millones de personas.

Las Naciones Unidas y mi Gobierno han dado a conocer conjuntamente un plan de respuesta por valor de 235 millones de dólares. Pido a los Estados Miembros que sean solidarios y ayuden a financiar este plan de emergencia.

En lo que concierne al respeto y la protección de los derechos humanos, el Gobierno ha adoptado una serie de medidas proactivas para garantizar la protección de los derechos y las libertades en todos los ámbitos. Es así que se respeta la libertad de prensa en todas sus formas, se investigan los casos de abusos y de violaciones de los derechos humanos, y los autores de violaciones son procesados por las autoridades policiales y judiciales.

Se necesitará tiempo y paciencia para lograr paz y seguridad duraderas en un país que durante decenios ha sufrido traumas y conmociones. Confiamos en que, con el apoyo sostenido del Consejo de Seguridad y la comunidad internacional en su conjunto, podremos avanzar en nuestro camino hacia un futuro pacífico y próspero para todos.